



Señores

**JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO DE CALI (REPARTO)**

Cali - Valle del Cauca

**(POR FAVOR REMITIR A JUZGADO ADMINISTRATIVO TRANSITORIO COMPETENTE)**

**Asunto:** Bonificación judicial  
**Medio de control:** Nulidad y restablecimiento del derecho  
**Demandante:** Beatriz Andrea Blanco Ospina  
**Demandada:** Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813, y portador de la tarjeta profesional 199.083 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de representante legal y profesional del derecho inscrito en el certificado de existencia y representación legal de Legalgroup Especialistas en Derecho SAS, con NIT 900.998.405-7, persona jurídica apoderada<sup>1</sup> de la demandante, Beatriz Andrea Blanco Ospina, identificada con cédula de ciudadanía 38.794.218, en los términos del poder legalmente conferido y con las facultades en el otorgadas, a través de este escrito y de manera respetuosa, presento acción contenciosa administrativa bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la **Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**, representada legalmente por su directora, doctora Naslly Raquel Ramos Camacho o por quien haga sus veces, con la finalidad que se declare la nulidad del siguiente acto administrativo: **1. Resolución No. DESAJCLR24-1387 del 18 de marzo de 2024,**<sup>2</sup> expedida por la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial (E) de Cali - Valle del Cauca, mediante la cual se niega el carácter de factor salarial de la bonificación judicial creada a través de los Decretos 383<sup>3</sup> y 384<sup>4</sup> de 2013, y su subsecuente liquidación en las prestaciones sociales devengadas por la servidora de la Rama Judicial; por las razones que ampliamente se expondrán en el presente escrito, y en consecuencia se proceda al respectivo restablecimiento del derecho.

## 1. Individualización de las partes

### 1.1. Legitimación por activa (demandante):

La parte demandante se encuentra legitimada en la causa por activa dentro de la presente demanda en consideración a que la demandante ostenta la calidad de servidora judicial, y el acto administrativo cuestionado en esta oportunidad y expedido por la entidad demandada, se encuentra viciado de nulidad al no reconocer el carácter de factor salarial a la bonificación judicial creada por los Decretos 383 y 384 de 2013, normativa que fue proferida con el fin de nivelar salarialmente a los empleados de la Rama Judicial a la luz de lo establecido en la Ley 4ª de 1992.

<sup>1</sup> **Artículo 75 C.G.P.:** "[...] Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. Igualmente podrá otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento, podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. Las Cámaras de Comercio deberán proceder al registro de que trata este inciso. [...]"

<sup>2</sup> Notificada a través de correo electrónico el 18 de marzo de 2024. (Prueba 3 y anexo 3)

<sup>3</sup> Modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

<sup>4</sup> Modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.



1.2. Legitimación por pasiva (demandada):

Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, representada legalmente por su directora, la doctora Naslly Raquel Ramos Camacho o por quien haga sus veces, por haber sido esta institución que profirió el acto administrativo cuya nulidad se depreca y por ser dicha entidad la encargada de liquidar y pagar las prestaciones sociales de mi poderdante.

2. Supuestos fácticos

2.1. La demandante se encuentra vinculada a la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca,<sup>5</sup> y su asignación mensual la ha compuesto el sueldo y la bonificación judicial. Los cargos desempeñados y el tiempo de vinculación son los siguientes:

CARGO	ESTADO SERVIDOR	DESPACHO	FECHA INI	FECHA FIN	SECCIONAL
SECRETARIO CIRCUITO - Grado 00	Provisionalidad	JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE CALI	16/03/2009	22/09/2009	SECCIONAL CALI
OFICIAL MAYOR CIRCUITO - Grado 00	Descongestion	JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE CALI	05/10/2009	18/12/2009	SECCIONAL CALI
OFICIAL MAYOR CIRCUITO - Grado 00	Descongestion	JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE CALI	01/03/2010	30/09/2010	SECCIONAL CALI
OFICIAL MAYOR CIRCUITO - Grado 00	Descongestion	JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE CALI	01/10/2010	16/12/2010	SECCIONAL CALI
SECRETARIO CIRCUITO - Grado 00	Provisionalidad	JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE CALI	26/01/2011	16/02/2011	SECCIONAL CALI
CITADOR III - Grado 00	Provisionalidad	JUZGADO 003 LABORAL DE CALI	17/03/2011	02/08/2011	SECCIONAL CALI
ESCRIBIENTE CIRCUITO - Grado 00	Provisionalidad	JUZGADO 003 LABORAL DE CALI	03/08/2011	31/08/2011	SECCIONAL CALI
SECRETARIO CIRCUITO - Grado 00	Provisionalidad	JUZGADO 016 ADMINISTRATIVO DE CALI	01/09/2011	16/12/2011	SECCIONAL CALI
SECRETARIO CIRCUITO - Grado 00	Provisionalidad	JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE CALI	12/01/2012	05/08/2013	SECCIONAL CALI
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - Grado 16	Hist Encargo Incapacidad	JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE CALI	06/08/2013	21/08/2013	SECCIONAL CALI
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - Grado 16	Hist Encargo Incapacidad	JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE CALI	22/08/2013	01/09/2013	SECCIONAL CALI
SECRETARIO CIRCUITO - Grado 00	Hist Vacante	JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE CALI	02/09/2013	29/04/2014	SECCIONAL CALI
SECRETARIO CIRCUITO - Grado 00	Descongestion	UJGADO ADMINISTRATIVO DESCONGESTION ORAL CARTAGO	16/06/2014	31/10/2015	SECCIONAL CALI
SECRETARIO CIRCUITO - Grado 00	Descongestion	JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE CALI	01/11/2015	30/11/2015	SECCIONAL CALI
SECRETARIO CIRCUITO - Grado 00	Descongestion	JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO DESCONGESTION CARTAGO	07/12/2015	31/12/2015	SECCIONAL CALI
AUXILIAR JUDICIAL I - Grado 00	Provisionalidad	DESPACHO DE MAGISTRADO 012 DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA	01/08/2016	20/11/2016	SECCIONAL CALI
SECRETARIO CIRCUITO - Grado 00	Provisionalidad	JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE CALI	12/12/2016	16/12/2016	SECCIONAL CALI
OFICIAL MAYOR CIRCUITO - Grado 00	Provisionalidad	JUZGADO 018 ADMINISTRATIVO DE CALI	10/03/2017	07/05/2017	SECCIONAL CALI
ESCRIBIENTE TRIBUNAL - Grado 00	Provisionalidad	SECRETARIA GENERAL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VALLE	15/02/2023	A la fecha	SECCIONAL CALI

2.2. Mediante escrito presentado el 15 de marzo de 2024,<sup>6</sup> la parte demandante solicitó a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, que se reconozca que la bonificación judicial creada por los Decretos 383<sup>7</sup> y 384<sup>8</sup> de 2013 constituye factor salarial para liquidar todas las prestaciones devengadas y las que se causen a futuro, percibidas por la demandante desde el 1° de enero de 2013, tales como, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de navidad, prima

<sup>5</sup> Prueba 2. Certificaciones laborales.

<sup>6</sup> Prueba 1. Reclamación administrativa.

<sup>7</sup> Modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

<sup>8</sup> Modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.



de productividad, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, interés a las cesantías, demás emolumentos que se vean incididos.

**2.3.** Frente a la reclamación elevada el 15 de marzo de 2024, la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, dio respuesta a través de la Resolución No. DESAJCLR24-1387 del 18 de marzo de 2024,<sup>9</sup> negando las peticiones de la solicitud, al considerar que dicha entidad como autoridad administrativa está sometida al imperio de la ley y debe darle estricto cumplimiento, por ello no tiene la facultad para interpretar, modificar e inaplicar las leyes o decretos reglamentarios, en razón a que son los jueces en sus respectivos fueros, a través de sus sentencias, son los que tienen la facultad, a diferencia de la autoridad administrativa que únicamente está sometida a su imperio y debe darle estricto cumplimiento. Por ende, indica que su proceder está circunscrito a la aplicación correcta de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 0383 de 2013, entre otros.

**2.4.** Tal y como se colige del referenciado acto administrativo, frente al mismo se dispuso que **sólo procedía el recurso de reposición** el cual debía ser interpuesto dentro de los 10 días siguientes a su notificación; no obstante, en virtud de que la entidad tiene una posición sesgada frente al no reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales de los trabajadores de la entidad, y en atención a lo dispuesto en el último inciso del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, referente a que la interposición de tal recurso no es obligatoria, este apoderado no recurrió la referida decisión, encontrándose en firme.

### 3. Pretensiones

**3.1.** Se inaplique bajo la excepción de inconstitucionalidad la siguiente expresión: “[...] y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud [...]”, contenida en el inciso primero del artículo 1.º del Decreto 383 del 6 de marzo de 2013,<sup>10</sup> modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024; y 384 del 6 de marzo de 2013,<sup>11</sup> modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024, así como los que sean expedidos por el Gobierno Nacional mientras se profiere el correspondiente fallo y mientras se siga limitando el carácter salarial de la bonificación judicial para todos los efectos legales y prestacionales.

**3.2.** Se declare la nulidad de la Resolución No. DESAJCLR24-1387 del 18 de marzo de 2024,<sup>12</sup> expedida por la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, mediante la cual negó el carácter de factor salarial

<sup>9</sup> Notificada a través de correo electrónico el 18 de marzo de 2024. (Prueba 3 y anexo 3)

<sup>10</sup> “[...] Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar [...]”

<sup>11</sup> “[...] Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones. [...]”

<sup>12</sup> Notificada a través de correo electrónico el 18 de febrero de 2024. (Prueba 3 y anexo 3)





de la bonificación judicial creada a través de los Decretos 383<sup>13</sup> y 384<sup>14</sup> del 06 de marzo de 2013, y su subsecuente liquidación en las prestaciones sociales devengadas por la servidora de la Rama Judicial, la señora Beatriz Andrea Blanco Ospina.

**3.3.** Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se reconozca que la bonificación judicial constituye factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales devengadas **y las que se causen a futuro.**

**3.4.** Que se condene a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar con efectos retroactivos a favor de mi poderdante, la suma que resulte como diferencia de la reliquidación de las prestaciones sociales devengadas por ella con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, desde el 1° de enero de 2013, y durante los periodos que se encuentre vinculada a la entidad devengando la mentada bonificación judicial.

**3.5.** Que las sumas que resulten a favor de la demandante sean debidamente indexadas según el índice de precios al consumidor, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 del 2011.

**3.6.** Se condene en costas y agencias en derecho a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

**3.7.** Se cancele a la demandante, o a quien o quienes su derecho representare, los intereses que se generen a partir de la fecha de la sentencia o del auto aprobatorio de la conciliación judicial, conforme a los artículos 192 y 195 del CPACA.

**3.8.** Que la sentencia se cumpla en los términos señalados en los artículos 192 y 195 del CPACA.

#### **4. Normas violadas**

Con la expedición del acto administrativo objeto de reproche se violaron los siguientes preceptos constitucionales y legales:

De la Constitución Política, el Preámbulo y los artículos 1. °, 2. °, 4. °, 5. °, 9. °, 13, 25, 29, 53, 55, 83 y 93.

De las disposiciones legales y estatutarias las Leyes 54 de 1962, 6 de 1972, 50 de 1990, 4ª de 1992, 319 de 1996, 1496 de 2011 y el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

De las disposiciones reglamentarias el Acta de acuerdo del 6 de noviembre de 2012 y los Decretos 1950 de 1973, artículo 8; 717 de 1978, artículo 12; y 1042 de 1978, artículo 42.

<sup>13</sup> Modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

<sup>14</sup> Modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.



## 5. Antecedentes normativos de la bonificación judicial

El legislador, a través de la Ley 4ª de 1992,<sup>15</sup> ordenó al Gobierno Nacional nivelar la remuneración percibida por los funcionarios y empleados de la Rama Judicial<sup>16</sup> atendiendo criterios de equidad.

Teniendo en cuenta la reticencia del Gobierno Nacional a dar cumplimiento a lo ordenado en la norma referida previamente, los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación se vieron en la necesidad de pronunciarse, a través de tres ceses de actividades, en los años 2006, 2008 y finalmente, en el segundo semestre del año 2012.

Con ocasión del último cese de actividades, una vez surtidas las negociaciones entre el Gobierno Nacional y los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación reunidos en asociaciones y corporaciones, el día 6 de noviembre de 2012 se suscribió acta<sup>17</sup> en la cual se acordó: “[...] Reconocer el Derecho a los Funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación a tener una nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4ª de 1992, atendiendo criterios de equidad [...]”.<sup>18</sup>

El Acuerdo del 6 de noviembre de 2012, suscrito con el alto Gobierno, es un acto jurídico vinculante por virtud del artículo 7.º numeral 5.º<sup>19</sup> del Decreto 1092 de 2012;<sup>20</sup> los artículos 7.º<sup>21</sup> y 8.º<sup>22</sup> de la Ley 411 de 1997<sup>23</sup> y el artículo 8.º<sup>24</sup> del Convenio 151 de la OIT.

Frente a lo anterior, cabe resaltar que dentro del acta<sup>25</sup> suscrita el 6 de noviembre de 2012, únicamente se acordó nivelar la remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, pero en ninguno

<sup>15</sup> “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”

<sup>16</sup> Incluidos los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación como lo predica el inciso 3º artículo 249 de la Constitución Política de Colombia, Título VIII. De la Rama Judicial. Capítulo 6. De la Fiscalía General de la Nación. (...) La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal”

<sup>17</sup> Acta de acuerdo suscrita entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación.

<sup>18</sup> El Acuerdo en mención no fue suscrito por el Fiscal General de la Nación, ni por el representante de los empleados de dicha fiscalía, ni por el representante de los empleados de los juzgados civiles, ni por el representante de los empleados de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, ni por el representante de los empleados de los juzgados administrativos y tampoco por el representante de los fiscales.

<sup>19</sup> “[...] Cierre de la negociación. Una vez concluida la etapa de negociación, las partes levantarán un acta final en la cual se señalarán los acuerdos y desacuerdos, dichas actas recogerán también los argumentos expuestos por cada una de las partes durante la negociación. La entidad empleadora con base en el acta final suscrita por las partes expedirá los actos administrativos a que haya lugar, o dará la respuesta motivada de su negativa a las peticiones, en un término no superior a 15 días hábiles contados a partir de la firma del acta final [...]”

<sup>20</sup> “[...] Por el cual se reglamentan los artículos 7 y 8 de la Ley 411 de 1997 en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos [...]”

<sup>21</sup> “[...] Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones [...]”

<sup>22</sup> “[...] La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados [...]”

<sup>23</sup> “[...] Por medio de la cual se aprueba el “Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”, adoptado en la 64 Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978 [...]”

<sup>24</sup> “[...] La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados [...]”

<sup>25</sup> Acta de acuerdo suscrita entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, ver prueba 4.



de sus apartes se establecieron las condiciones bajo las cuales se haría y mucho menos que la solución que se le diera contraviniera los derechos laborales de estos, surgiendo el interrogante de cómo pretendía el Gobierno Nacional efectuar una nivelación salarial a través de la creación de una bonificación judicial, sin que esta constituya factor salarial para todos los efectos legales, contrariando así los lineamientos trazados por el legislador en la Ley 4ª de 1992.

En cumplimiento de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió, entre otros, los Decretos 383<sup>26</sup> y 384<sup>27</sup> del 6 de marzo de 2013, mediante los cuales se creó una “bonificación judicial” para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Ejecutivas Seccionales de la Rama Judicial, indicando que las mismas serían reconocidas a partir del 1º de enero de 2013 en forma mensual, permanente y periódica.

El artículo 1º de los Decretos 383 y 384 de 2013 determina que dicha bonificación judicial “[...] constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de la Seguridad Social en Salud [...]”, y deja por fuera su aplicación como factor salarial en la liquidación y cancelación de las prestaciones a que tiene derecho mi poderdante, afectando sus ingresos económicos.

Conforme lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no otorga el carácter de factor salarial a la bonificación judicial creada mediante los Decretos 383 y 384 de 2013.

El Decreto 383 de 2013 fue modificado por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024; y el Decreto 384 de 2013 fue modificado también por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

Por lo expuesto, se colige que la bonificación judicial fue la herramienta escogida por el Gobierno Nacional para nivelar salarialmente a los servidores públicos de la Rama Judicial; no obstante, señaló que constituiría factor salarial únicamente para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud, pero no al momento de liquidar las prestaciones devengadas por los mismos.

## 6. Concepto de la violación

De conformidad con lo contemplado en el artículo 138 del CPACA, toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o

<sup>26</sup> “[...] Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar [...]”-

<sup>27</sup> “[...] Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones. [...]”.





presunto y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.

A continuación, se exponen con claridad los argumentos fácticos y jurídicos que demuestran que el acto administrativo demandado debe ser declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en su lugar restablecerse el derecho de la demandante, al demostrarse no una sino varias de las causales enunciadas.

## **6.1. Violación de la Constitución Política de Colombia como causal de nulidad.**

### **6.1.1. Del Preámbulo**

En él se establece de manera clara que “[...] el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga [...]” la Constitución Política.

Pero teniendo en cuenta las circunstancias que rodean el caso objeto de debate y como hasta aquí se ha expuesto, a través de la expedición de los Decretos 383 y 384 de 2013, a los servidores públicos de la Rama Judicial no se les están asegurando sus derechos a la igualdad dentro de un marco jurídico y económico, pues se reitera que al no reconocerse la bonificación judicial como factor salarial, tratándose de un pago periódico y habitual, se está desconociendo y omitiendo el pago de las correspondientes prestaciones sociales que por ley tienen derecho.

### **6.1.2. De los artículos 1.º y 2.º:**

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 1.º, considera el trabajo como uno de los principios fundamentales dentro del Estado Social de Derecho que permite a las personas mejorar sus condiciones de vida; así mismo, el artículo 2.º establece los fines del Estado y entre ellos se encuentra el de garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, los cuales se encuentran vulnerados por la entidad demandada al desconocer la bonificación judicial como factor salarial y su subsecuente liquidación para las prestaciones sociales, impidiendo el mejoramiento de sus condiciones económicas, pues se precisó anteriormente, los empleados de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial habían perdido el poder adquisitivo de sus salarios, por lo que el Gobierno Nacional suscribió el Acuerdo del 6 de noviembre de 2012, donde se acordó nivelar salarialmente a los mismos, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992; en consecuencia, no tiene sentido que los decretos administrativos creados para tal fin vulneren abiertamente la remuneración a la cual tienen derecho.



### 6.1.3. Del artículo 4. °

Nuestro estatuto superior estableció que “[...] La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales [...]”.

En un Estado social, constitucional y democrático de derecho como el nuestro, todo operador jurisdiccional es guardián material de la Constitución; por lo tanto, aquél debe realizar permanentes juicios de constitucionalidad bajo los principios de autonomía y libertad conceptual.

La jurisprudencia constitucional ha definido que la excepción de inconstitucionalidad es una herramienta de la que pueden hacer uso los operadores jurídicos cuando evidencien una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales, figura jurídica que tiene efecto inter partes.<sup>28</sup>

Concebida y establecida la fuerza normativa de la Constitución, nada impide al juez o en general al llamado operador jurídico fundar sus decisiones en esos principios, valores o en los textos constitucionales que los materializan sin esperar mediación o regulación legal alguna.

En el presente asunto se pretende principalmente, se declare la nulidad del acto administrativo expedido por la entidad demandada y se acceda a las súplicas de la demanda, inaplicando para ello el artículo 1.° de los Decretos 383<sup>29</sup> y 384<sup>30</sup> de 2013, por cuanto su aplicación es violatoria de norma superior en cuanto al aparte final del artículo 53 de la misma, que prohíbe la extinción de los derechos laborales adquiridos por leyes posteriores, así como del principio constitucional de los derechos adquiridos contenidos en el párrafo segundo del artículo 53 *ibídem*, en el entendido de que este instrumento protege y garantiza los derechos adquiridos de la demandante y materializa el principio de la supremacía constitucional, obligatorio para todos los jueces.

### 6.1.4. Del artículo 5. °

La Constitución Política de Colombia dispone que “[...] el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona [...]”, dado su carácter fundamental, principio que se encuentra vulnerado por la entidad demandada al negar el carácter de factor salarial de la bonificación judicial creada a través de los Decretos 383<sup>31</sup> y 384<sup>32</sup> de 2013 para los empleados de la Rama Judicial, bajo la premisa de que el mismo no constituiría factor salarial para todos los efectos legales, lo que se traduce en un menoscabo de los ingresos de mi poderdante, quien adquirió ese derecho hace más de 20 años de conformidad con la Ley 4ª de 1992, la cual fue incumplida por el Gobierno Nacional al no actualizar

<sup>28</sup> Sentencia SU132/13, expediente T-3.536.944.

<sup>29</sup> Modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

<sup>30</sup> Modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

<sup>31</sup> Modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

<sup>32</sup> Modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.





sus salarios, haciendo que la misma perdiera su poder adquisitivo y al no permitir que la herramienta utilizada para remediar la situación produzca todos los efectos legales.

#### 6.1.5. De los artículos 9° y 93

Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, pero el Estado colombiano desconoce estos principios al omitir la aplicación de los tratados y convenios adoptados por él mismo para el ordenamiento interno a través de leyes de la república, que para el caso concreto se circunscribe a:

- La Convención Americana de Derechos Humanos aprobada en el orden interno mediante Ley 16 de 1972, que en su artículo 26 habla del desarrollo progresivo.
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, aprobada mediante Ley 319 de 1996.
- Los Convenios 95 y 100 de la OIT, sobre la igualdad de remuneración y protección del salario.

Respecto al alcance de los convenios internacionales, la sentencia C-401 de 2005,<sup>33</sup> por medio de la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, estableció la obligación de integrar a nuestro ordenamiento los convenios debidamente ratificados por nuestro país, en aplicación del bloque de constitucionalidad; igualmente, quedó establecido el carácter normativo obligatorio de los convenios de la OIT ratificados por Colombia.

Por lo expuesto, el aparte cuestionado de los Decretos 383<sup>34</sup> y 384<sup>35</sup> de 2013, debe ser inaplicable bajo la **excepción de inconstitucionalidad**, en atención a que además de violar el articulado de nuestra Constitución Política de Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes, no está acorde con los tratados internacionales que fueron ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, bajo los cuales el Estado se comprometió a respetar la dignidad humana y el derecho al trabajo, aunado a que en virtud del artículo 93<sup>36</sup> de la Constitución Política de Colombia, es necesario acudir a instrumentos de derecho internacional que desarrollan materias laborales y conforman la normatividad *ius fundamental* vigente.

<sup>33</sup> Sentencia de la Corte Constitucional C-401 del 4 de abril de 2005, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, expediente D-5355, demandante Carlos Ernesto Molina, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa.

<sup>34</sup> Modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

<sup>35</sup> Modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

<sup>36</sup> “[...] Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. [...]”



En consecuencia, la Rama Judicial al desconocer dichas prerrogativas quebranta el bloque de constitucionalidad, porque los derechos invocados a favor de mi mandante son producto de una orden legal y constitucional, cuya inobservancia atenta contra el principio de progresividad.

De no hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad, para el caso planteado, la entidad violaría los estatutos internacionales referidos, porque al desconocer un derecho a la demandante, que se encuentra fijado en la Ley 4ª de 1992, entre otras normas legales y constitucionales, vulnera su derecho a la protección del salario por parte del empleador y la discrimina, siendo palmariamente violatorio de los derechos fundamentales de mi poderdante.

Conforme lo expuesto, según el principio ***pacta sunt servanda***,<sup>37</sup> las normas de derecho interno deben ser interpretadas de manera que armonicen con las obligaciones internacionales del Estado colombiano; por tal razón, al estar el aparte cuestionado de los pluricitados Decretos 383 y 384 de 2013 desenfocados de los tratados internacionales sobre derechos humanos y aspectos laborales, violan esta normatividad internacional.

De ahí que, es importante reiterar que la Convención de Viena contempla el principio del ***pacta sunt servanda*** y, por ende, los Estados no pueden incumplir las normas de carácter nacional, internacional y constitucional, so pretexto de aplicar una norma de estirpe interna, ya que no puede el trabajador tener desmejoras, ni ser discriminado de ganancias que obtiene producto de la prestación de sus servicios.

En lo relacionado con el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos legales, previa inaplicación por inconstitucionalidad de la normatividad vigente por desconocer el bloque de constitucionalidad, resulta bastante explícita la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala de Conjuces, del 31 de agosto de 2016, con ponencia de la doctora María Isabel Vanegas Arias,<sup>38</sup> dentro de la cual se señaló que no existen criterios que justifiquen la decisión de quitarle el carácter salarial a la bonificación, pues ello resulta contrario a las normas superiores y al bloque de constitucionalidad en materia laboral, lo que hace procedente la inaplicabilidad de dicha disposición; resaltó que la naturaleza de las cosas no puede ser apartada ni si quiera por el legislador, máxime cuando ello es contrario a los conceptos reconocidos en los tratados internacionales.

Aunado a lo anterior, dicha providencia resalta que la Constitución Política de Colombia consagra el trabajo como derecho, principio y valor dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dando la obligación al Estado de protegerlo prevalentemente de manera tal que se garanticen los mínimos constitucionales y una plena realización de este derecho; finalmente explica que en virtud del principio de

<sup>37</sup> Corte Constitucional, sentencia C-400 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

"[...]Este principio de Pacta sunt servanda, según el cual los tratados deben ser cumplidos por las partes que se obligaron, constituye la base esencial del derecho de los tratados y, en general, del funcionamiento armónico y pacífico de la comunidad internacional. Por ello, algunos teóricos han considerado que esta norma representa el principio base, la norma fundamental y más elemental de todo el sistema jurídico del derecho internacional, de la cual depende la validez de las reglas de este derecho. Según su criterio, que esta Corte acoge, resulta imposible pensar el derecho internacional como disciplina autónoma sin presuponer una norma como Pacta sunt servanda, por lo cual ella es sin lugar a dudas uno de los principios de derecho internacional reconocidos por Colombia (CP art. 9º) [...]".

<sup>38</sup> Radicado: 05 0013331 031200800041 01 NI 2010-2014, demandante María Elena Gaviria Cardona.



progresividad, el Estado tiene la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de esos derechos.

Acorde con lo expuesto y sin que sea necesario ahondar en mayores elucubraciones, considera este mandatario judicial que la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación al negar el carácter de factor salarial de la bonificación judicial vulnera la normatividad vigente de orden interno, pues con su actuar están incumpliendo el desarrollo progresivo de los fines del Estado y los intereses generales de los administrados en concordancia con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, entre otros, así como los Tratados Internacionales ratificados por Colombia.

#### **6.1.6. Del artículo 13**

La carta fundamental establece que “[...] Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica [...]”; así mismo, “[...] el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva [...]”, pero en el caso *sub júdice*, dichas condiciones no se dan, pues como se ha esbozado de manera reiterada, no es posible indicar que los servidores públicos de la Rama Judicial gozan de un trato y protección igualitaria de sus derechos respecto de otros trabajadores a los que sí se les garantiza el pago real y efectivo de todas sus prestaciones sociales, si se tienen en cuenta que ello no ocurre al desconocerse no solo como factor salarial la bonificación judicial creada mediante los Decretos 383<sup>39</sup> y 384<sup>40</sup> de 2013, sino también el alcance y concepto de salario conforme lo ha establecido la jurisprudencia de las altas Cortes, desconociendo así el precedente judicial el cual es de obligatorio cumplimiento.

#### **6.1.7. Del artículo 25**

En lo relativo al trabajo la Constitución indicó que: “[...] es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas [...]”, y si bien es cierto no se está desconociendo el derecho al trabajo propiamente dicho, pues no se está negando una oportunidad laboral, lo cierto es que se está excluyendo a los funcionarios públicos de recibir una remuneración justa y legal por el trabajo que realizan cada día.

#### **6.1.8. Del artículo 29**

Conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, las actuaciones procesales también deben ser el resultado de un proceso donde las partes tengan igualdad de oportunidades para presentar, solicitar y controvertir las pruebas con miras a demostrar la existencia de su derecho. Tales actuaciones deben ser adelantadas conforme a las disposiciones que regulan cada proceso, de

<sup>39</sup> Modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

<sup>40</sup> Modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.





modo que cuando no se aplican dichas formalidades, el derecho fundamental al debido proceso se ve lesionado.<sup>41</sup>

En suma, el debido proceso es una garantía de carácter constitucional para obtener por parte de la administración no solo la aplicación adecuada de los procedimientos ajustados a derecho, sino el ejercicio correcto de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios ni contrarios a los preceptos del Estado Social y de Derecho como el nuestro. En virtud de ello, es deber de la administración desarrollar sus competencias con sujeción al principio de legalidad, presupuesto último que no se cumplió por desconocer las normas pertinentes para el presente caso respecto de la negación del reconocimiento de la prestación laboral y su liquidación como factor salarial, por tal razón la demandada viola esta norma superior.

#### 6.1.9. Del artículo 53

Esta norma determina que el estatuto del trabajo tendrá en cuenta por lo menos algunos principios fundamentales, entre los cuales se encuentra el de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultad de transigir, aplicar la situación más favorable al trabajador en caso de duda e interpretación de las fuentes formales de derecho, el de la primacía de las realidades sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones, entre otros.

Así mismo, en el inciso 5. ° señala que “[...] La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana **ni los derechos de los trabajadores** [...]”. (Resaltado fuera del texto).

Con la expedición del acto administrativo acusado, la entidad demandada vulnera los principios invocados, por cuanto la demandante no puede renunciar al derecho que tiene a que su “nivelación salarial”, contemplada en la Ley 4ª de 1992, constituya factor salarial para todos los efectos legales.

Es claro que en el presente caso nos encontramos frente a un derecho irrenunciable, lo anterior en virtud de lo establecido por el legislador a través de los artículos 14 y 142 del Código Sustantivo del Trabajo.

Así mismo, es importante resaltar en esta oportunidad que si bien en los Decretos 383<sup>42</sup> y 384<sup>43</sup> de 2013 se indica que la bonificación judicial no constituye factor salarial para todos los efectos legales, dicha aseveración se erige en una falacia argumentativa y un despropósito para los destinatarios del mismo, dado que esta figura creada por el Gobierno cumple con todos los requisitos formales para ser constitutiva de salario al ser percibida por mi mandante en forma habitual y periódica y como contraprestación de sus actividades laborales, debiendo primar la realidad sobre las formalidades.

<sup>41</sup> Corte Constitucional, expediente T-89.002, peticionaria: Sociedad "El Gran Sol Ltda."

<sup>42</sup> Modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

<sup>43</sup> Modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.



Adicionalmente, la demandada al expedir el acto administrativo objeto de *Litis*, vulneró el principio de favorabilidad de las normas laborales de que goza la demandante, al ceñirse al tenor literal de los Decretos 383 y 384 de 2013, en lugar de dar prevalencia a las normas legales y constitucionales que estaban a su favor, así como a los Tratados Internacionales debidamente ratificados por Colombia, que son claros al señalar que todo pago habitual y periódico constituye factor salarial para todos los efectos legales.

#### **6.1.10. De los artículos 55 y 83**

El Acuerdo del 6 de noviembre de 2012 puso fin al conflicto suscitado entre el Gobierno Nacional y los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación relacionado con la nivelación salarial; por ello, en virtud de una negociación colectiva se les reconoció el derecho a la misma, para lo cual se estipuló se expedirían el acto administrativo tendiente a dar cumplimiento a lo allí acordado.

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 383<sup>44</sup> y 384<sup>45</sup> de 2013, mediante los cuales crea una bonificación judicial, mismos que señalan que ésta no constituye factor salarial para todos los efectos legales, siendo ello contrario con la realidad de lo acordado mediante el Acuerdo del 6 de noviembre de 2012 donde claramente se reconoce el derecho a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación de ser nivelados salarialmente.

Por lo tanto, se observa que las autoridades públicas encargadas de materializar un derecho laboral adquirido, no obraron de buena fe y faltaron al principio de confianza legítima que se había creado al firmar un acuerdo con el Gobierno Nacional, pues con la expedición de dicho acto administrativo anuló la expectativa que tenía la demandante a que se le nivelara salarialmente con todas las prerrogativas legales.

Ahora, si bien es cierto el Acuerdo del 6 de noviembre de 2012 puso fin al conflicto suscitado entre el Gobierno Nacional y los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, relacionado con la nivelación salarial, en virtud de una negociación colectiva, lo cierto es que esto no impide que quienes se encuentren inconformes con el mecanismo adoptado para dar cumplimiento a lo acordado entre las partes, hagan uso de las herramientas jurídicas para hacer valer sus derechos, entre estas, cuestionar la legalidad del acto administrativo de nivelación salarial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

<sup>45</sup> Modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

<sup>46</sup> Consejo de Estado - Sección Cuarta, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Barcenás. sentencia del 28 de febrero de 2013, radicación 25000-23-25-000-2012-01675-01(AC), actor: Rosse Maire Cepeda, demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



## 6.2. Violación de la ley como causal de nulidad:

### 6.2.1. De la Ley 54 de 1962

La Rama Judicial está vulnerando una norma de rango supranacional como lo es el Convenio 95 de 1949 de la OIT (sobre la protección al trabajo), aprobado por la Ley 54 de 1962, el cual determina: "[...] A los efectos del presente convenio, el término "salario" significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que se pueda evaluar en efectivo, fijado por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, **por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar** (art. 1º [...]). (Resaltado fuera del texto original)

Adicionalmente, el hecho de restarle carácter salarial a la bonificación judicial no reconocida a la demandante, vulnera no sólo la definición de salario contenida en el artículo 1.º del Convenio 95 de la OIT de 1949, ya que de conformidad con la jurisprudencia en materia de salarios se aplican no sólo los criterios plasmados por la mencionada organización en su trigésima segunda reunión, efectuada en Ginebra, Suiza en el año de 1949 y aprobada mediante la Ley 54 de 1962, sino el contexto del espíritu del tratado, el cual es evidentemente la protección del salario.

### 6.2.2. De la Ley 50 de 1990

Resulta clara la transgresión del artículo 14 de dicho precepto normativo, pues no se están teniendo en cuenta los elementos constitutivos de salario, tal y como se estableció en esta oportunidad por el legislador, así: "[...] *Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de /as horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones [...]*".

### 6.2.3. De la Ley 4 de 1992

El acto administrativo demandado vulnera lo estipulado en la Ley 4ª de 1992, toda vez que no acataron las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

La Ley 4ª de 1992, es una ley marco que el Congreso de la República expidió en desarrollo de los literales e) y f) de la Constitución Política, para señalar las normas, objetivos y criterios generales que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, así como las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales. En su artículo 4.º, se indica que el Gobierno Nacional "[...] modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1 literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones [...]".





Ahora, en este punto es muy importante resaltar que el artículo 1.º de la Ley 4ª de 1992, determina que el régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo sus disposiciones y las de los decretos que para su desarrollo dicte el Gobierno Nacional, carecen de efecto y no crearán derechos; por tanto, la Rama Judicial al no darle connotación salarial a una bonificación judicial creada con base en los principios de dicha ley, desnaturaliza los efectos reales para la cual fue creada, excediéndose así en su facultad de reglamentación, desbordando y violando claros preceptos de índole supranacional, desconociendo además la esencia misma del concepto de salario, el cual por definición es lo que el empleado recibe como retribución de sus servicios prestados de manera habitual y periódica.

Así mismo, la entidad demandada desconoce el efecto vinculante del derecho reconocido a través del Acuerdo del 06 de noviembre de 2012, mediante el cual se ordenó nivelar la remuneración a un grupo poblacional de servidores públicos para así recuperar la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo.

#### **6.2.4. Del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo**

La bonificación judicial al constituir únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud, contraría lo dispuesto en esta normativa, en atención a la limitación sobre la cual recae, pues dicho artículo establece lo siguiente: “[...] Elementos integrantes. **Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte**, como primas, sobresueldos, **bonificaciones habituales**, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones [...]”. (Resaltado fuera del texto). Posición que es reiterada por la Corte Constitucional en sentencia C-521 de 1.995.

Una vez analizado lo anterior, habrá de entenderse que la “bonificación judicial” así llamada, es una contraprestación al trabajo desarrollado por los servidores de la Rama Judicial del Poder Público, la cual se paga en forma mensual, por lo que según lo dispuesto en la legislación laboral, los preceptos constitucionales y los Convenios Internacionales ratificados por Colombia, esos rubros constituyen salario para todos los efectos legales y así debe ser entendido, no como lo dispuso el Gobierno a través de los Decretos 383 y 384 del 6 de marzo de 2013.

#### **6.2.5. De las Leyes 16 de 1972 y 319 de 1996**

Con la expedición de las anteriores normas descritas, el Estado colombiano adoptó dentro de su ordenamiento interno la Convención Americana de Derechos Humanos y su protocolo adicional, a través de los cuales se promueve el respeto, protección y garantías de los derechos humanos, obligándolo a crear condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.



Aspectos que no se garantizan de manera total y efectiva a los ciudadanos, en especial a los servidores públicos de la Rama Judicial, pues como ya se ha reiterado, a través de sus situaciones laborales, específicamente las establecidas con los Decretos 383 y 384 de 2013, se les desconoce las condiciones justas, equitativas y satisfactorias que el mismo artículo 7.º del Protocolo Adicional de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que tienen derecho a que se les reconozca como un derecho adquirido. Es por ello que el mismo Estado colombiano con sus actuaciones desdibuja no solo los fines del Estado en sí mismo, sino también los principios y fines de los convenios y tratados internacionales por él suscrito.

#### **6.2.6. De la Ley 1496 de 2011**

El desconocimiento de la presente ley no solo acarrea la vulneración de la misma, al no garantizar la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, sino que además se transgreden los derechos fundamentales constitucionales (v.g. la igualdad, el trabajo) y los estatutos normativos que lo regulan.

#### **6.3. Violación de normas reglamentarias:**

##### **6.3.1. Del Acuerdo de fecha 6 de noviembre de 2012**

La entidad demandada, al negar las pretensiones de mi poderdante, desconoció los efectos vinculantes del Acuerdo del 6 de noviembre de 2012, suscrito por el Gobierno Nacional, por el cual reconoció un derecho a la nivelación en la remuneración a los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, pues si bien el mismo puso fin al conflicto suscitado entre estos, el acto administrativo creado con posterioridad, con el fin de cumplir lo allí ordenado, no cumplen con el fin del mismo, en la medida que se crea una bonificación judicial como herramienta para nivelar salarialmente a mi mandante, pero se indica que los mismos no constituyen factor salarial para todos los efectos legales.

##### **6.3.2. Del artículo 8.º del Decreto 1950 de 1973**

Este artículo consagra que para establecer la remuneración de los empleados o funcionarios públicos en igualdad de condiciones se dará aplicación al principio “a *igual trabajo igual remuneración*” y como se observa en el caso *sub examine*, la parte demandada no está cancelando el salario que legalmente debe percibir la demandante, ya que no se tiene como factor constitutivo de salario la bonificación judicial consagrada en los Decretos 383<sup>47</sup> y 384<sup>48</sup> de 2013.

##### **6.3.3. Del artículo 12 del Decreto 1042 de 1978.**

Consagra este precepto normativo que, además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el funcionario o empleado; consiguientemente,

<sup>47</sup> Modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

<sup>48</sup> Modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.



esta norma es transgredida al excluirse la bonificación salarial como factor salarial, ya que es percibida por los servidores de la Rama Judicial de manera habitual y periódica.

#### **6.3.4. Del artículo 42 del Decreto 717 de 1978.**

Este artículo consagra que, además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, el valor del trabajo supletorio y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.

En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del Decreto 106 de 1994, la bonificación judicial a la cual tienen derechos los empleados y funcionarios de la Rama Judicial debe tenerse como factor constitutivo de salario.

#### **7. De la solicitud elevada por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el Oficio PCSJ21-851 del 29 de noviembre de 2021:<sup>49</sup>**

En este punto, considera pertinente el suscrito apoderado, traer a colación el Oficio PCSJ21-851 del **29 de noviembre de 2021**, mediante el cual el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicitan al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expedir decretos a fin de liquidar las prestaciones sociales y cesantías de los servidores judiciales del país, incluyendo como factor salarial la bonificación judicial regulada mediante los Decretos 383 y 384 de 2013; para lo anterior, argumentaron que de conformidad con lo regulado en la Ley 4 de 1992 “*Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución*”, la potestad de fijar los emolumentos salariales y prestacionales de los servidores públicos radica en el Gobierno Nacional, y con fundamento en tales facultadas, para el año 2013, el presidente de la República con los ministros del ramo, principalmente el de Hacienda y Crédito Público, expidieron los Decretos 383 y 384 de 2013, mediante los cuales se creó la bonificación judicial, normas que en el artículo 1°, establecieron que dicha bonificación sólo constituiría factor salarial para la base de cotización de los Sistemas Generales de Pensión y Salud.

Se expuso además en el referido oficio que, los beneficiarios de la bonificación judicial, inconformes con la disposición legal consistente en que la bonificación judicial únicamente tenga carácter salarial para aportes al Sistema de Seguridad Social, desde el mismo año de expedición de los decretos precitados, han interpuesto demandas en contra de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el propósito de reclamar ese carácter salarial para efectos de liquidar las prestaciones sociales y cesantías, exponiendo, entre otros argumentos, que la bonificación, por hacer parte de la asignación salarial debe

<sup>49</sup> Prueba 5. Oficio PCSJ21-851 del 29 de noviembre de 2021.





tener carácter salarial para todos los efectos, por cuanto se percibe de manera periódica y habitual, respaldados en jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Igualmente han presentado demandas de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra los Decretos 383 y 384 de 2013; agregaron que en tales medios de control, la entidad ha ejercido el derecho a la defensa, pero los argumentos no han prosperado, por cuanto los conjueces, juzgados transitorios y magistrados de salas transitorias de los tribunales administrativos, vienen condenado a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la reliquidación de prestaciones sociales y cesantías de manera retroactiva, con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, con fundamento en los siguientes argumentos:

*"En consecuencia, para el Tribunal, de la expresión "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud", contemplada en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, solo la palabra "únicamente" resulta contraria a lo establecido en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, y Convenio 95 de la OIT, en relación con los artículos 26 de la C.A.D.H. y 4 del Protocolo de San Salvador adicional a ésta, por cuanto constituye una exclusión irracional y violatoria de los contenidos materiales de la Carta Magna al desconocer la protección especial al trabajo de los servidores públicos de la Rama Judicial en condiciones dignas y justas y la primacía de la realidad sobre las formalidades, pues, no es la calificación que hace el legislador lo que determina si un factor es salario, sino la naturaleza habitual y periódica de la remuneración, por lo tanto confirmará la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4° de la Constitución Política, adoptada por el Juzgado, pero, modificará la parte resolutive en el sentido que solo será inconstitucional la palabra "únicamente" contenida en citada frase del artículo 1 del Decreto 383 de 2013, para lo cual se atenderá lo previsto en el artículo 148 del C.P.A.C.A., que dispone: "En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos ínter partes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley. La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte".*

[...]

*Por estas mismas razones, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, no debió negar la reliquidación pedida por el demandante, habida cuenta que pudo aplicar la excepción de inconstitucionalidad ya analizada, respecto de la frase "únicamente" contenida en el artículo 1 del Decreto 0383 de 2013, que fue la base para excluir la Bonificación Judicial de ser para la liquidación de todas las prestaciones sociales a excepción de la cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con fundamento en que ese derecho si constituye factor salarial, y en aplicación de los principios mínimos fundamentales de los derechos de los trabajadores establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política, de la primacía de la realidad sobre las formalidades, irrenunciabilidad del salario y remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo."<sup>50</sup>*

<sup>50</sup> Sala Transitoria – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sentencia del 29 de octubre de 2021, M.P. Dr. Luis Eduardo Pineda Palomino, Exp. 11001333500920170024902, Ole. ORLANDO MEJIA APARICIO.



**Añadieron a sus argumentos que, en el sentido de la sentencia en cita, se han proferido otras en las que se acceden a las pretensiones de la demanda en un porcentaje del 99,8%.**

Finalmente, con fundamento en lo expuesto, solicita el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expedir decretos a fin de liquidar las prestaciones sociales y cesantías de los servidores judiciales del país, incluyendo como factor salarial la bonificación judicial regulada mediante los Decretos 383 y 384 de 2013.

Así entonces, ha de concluirse al respecto, que el Oficio PCSJ21-851 del 29 de noviembre de 2021, constituye una prueba más, respecto a la procedencia de las pretensiones que se incoan el en asunto de la referencia, y bajo esas circunstancias hay lugar a accederse a las mismas.

**8. De la posición jurisprudencial acogida por los diferentes Tribunales Administrativos del país, en asunto de idéntica situación fáctica al *sub examine*:**

El Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Transitoria, construyó y sustentó sentencia proferida el pasado 24 de noviembre de 2023, en proceso bajo el radicado 66001-33-33-004-2018-00405-01.<sup>51</sup>

*“(…) Resulta claro entonces que, si la bonificación creada mediante Decreto 382 de 2013, es habitual, y los demandantes Dora Patricia Galvis Robles, Juan Carlos Gómez Mejía y Oswaldo Jaramillo Giraldo en calidad de servidores de la Fiscalía General de la Nación la venían percibiendo mes a mes, de manera constante y responde a una retribución o contraprestación de su trabajo, no cabe duda de que constituye salario y por lo tanto debe considerarse como factor para la liquidación de todas sus prestaciones sociales y económicas, tal como lo señaló la falladora de primera instancia.*

*Lo dicho robustece lo ya señalado respecto a que la disposición cuestionada es contraria a la Constitución Política y por ende deba ser inaplicada, como en efecto se hizo en la sentencia recurrida, puesto que la Fiscalía General de la Nación, pese a estar facultada para nivelar el salario de sus servidores, atendiendo a principios de equidad, está excluyendo un factor del concepto de salario, asunto que, en gracia de discusión, es del resorte del Congreso de la República.*

*Y como consecuencia de la inaplicación, obviamente los actos expedidos con fundamento en el Decreto 382 de 2013, devienen en nulos tal como fue declarado por la Conjuez del Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, razón por la cual será confirmada la sentencia de primera instancia (…).”*

Con similares argumentos el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 22 de marzo del dos mil veinticuatro (2024), emitida en proceso bajo

<sup>51</sup> Demandante: Dora Patricia Galvis Robles y otros, demandado Nación - Fiscalía General de la Nación, M.P. Laura Eugenia Ochoa Giraldo, sentencia de segunda instancia.



el radicado 66001-33-33-001-2020-00094-02,<sup>52</sup> correspondiente a un tema de idéntica situación fáctica al asunto de marras, accedió a las pretensiones de la demanda, para lo cual argumentó:

*“En este caso, fue el ejecutivo y no el legislador el que restringió, mediante el Decreto 382 de 2013, el carácter salarial de la bonificación judicial, cuando determinó que no podía considerarse como factor para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales de los servidores judiciales, y, por tanto, quien usurpó la competencia del legislador en la materia.*

*Nótese que, esta Sala, amparándose en el precedente del Consejo de Estado, con relación a la facultad del legislador y del ejecutivo para establecer factores salariales, resolvió acoger la siguiente regla: “el no reconocimiento como carácter salarial de la Bonificación, considera la Sala que es un asunto de reserva legal; por lo que la jurisprudencia constitucional a través de diferentes decisiones ha fijado el criterio de que la regulación de los factores salariales son de libre configuración “del legislador”, mas no del ejecutivo, como es el caso que nos ocupa<sup>17</sup>”.*

*La regla antedicha se extrajo de la sentencia del 06 de abril de 2022, proferida por el Consejo de Estado, que sustenta su tesis en la sentencia C – 101 de 2003, con relación al alcance de la potestad reglamentaria del ejecutivo, delimitado por el marco señalado por el legislador en la Ley 4ª de 1992.*

*[...]*

*De otro lado, con fundamento en la prohibición instaurada en el artículo 3º del Decreto 382 de 2013, menos aún puede deducirse que la liquidación de las prestaciones sociales exenta de la bonificación judicial en su condición de factor salarial se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico. Son dos las razones primordiales que conllevan a esta a conclusión:*

*a.- El artículo 3º del Decreto 382 de 2013 debe ser interpretado en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. De este ejercicio se desprende que, si bien es cierto, ninguna autoridad puede modificar el régimen salarial estatuido en el Decreto referido, esta proscripción debe ceder, cuando la jurisdicción advierte que dicho régimen contraviene las disposiciones de la Ley 4ª de 1992, como sucede en el caso concreto, al punto que la misma Ley Marco dispone que de presentarse esta circunstancia, carecerá de eficacia o lo que es lo mismo de todo efecto jurídico.*

*b.- Las autoridades administrativas y judiciales se encuentran sometidas al imperio de la ley, “lo cual significa sobre todo al imperio de la Constitución, de conformidad con los artículos 2 y 4 Superiores” 19*

*Luego entonces, en el caso que se examina, debe prevalecer la interpretación compatible con la Constitución, en consecuencia, aquella que sostiene que la bonificación judicial debe considerarse dentro de la liquidación de las prestaciones sociales, sin importar la restricción consagrada en el artículo 3º del Decreto citado.*

*[...]*

*Así las cosas, se concluye que la parte demandante tiene derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión de la bonificación salarial en su condición de factor salarial, a raíz de la inaplicación de la expresión “y constituirá únicamente*

<sup>52</sup> Demandante Diego Ricardo García Muñoz, demandado Nación – Fiscalía General de la Nación, sentencia de segunda instancia, Tribunal de lo contencioso administrativo del Valle del Cauca, M.P. Gonzalo Perdomo Cabrera.





*factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, prevista en el artículo 1° del Decreto 382 de 2013, la cual, fue reiterada en los Decretos posteriores que lo modificaron. En su lugar, se deben aplicar el preámbulo y los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política y el principio de la equidad.”.*

## **9. La posición del H. Consejo de Estado respecto de la bonificación judicial**

El 6 de abril de 2022, el H. Consejo de Estado emitió sentencia en un caso de similar situación fáctica al *sub examine*, donde entre otras cosas, inaplicó por inconstitucional una expresión contenida en el artículo 1° del Decreto 382 de 2013, el cual regula la bonificación judicial de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, y a título de restablecimiento se condenó a la entidad a reliquidar y pagar a la allí demandante las diferencias salariales y prestacionales, incluyendo para tales efectos la bonificación judicial como factor salarial, al estimar:<sup>53</sup>

*“El Gobierno Nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 382 de 6 de marzo de 2013, el cual creó una Bonificación Judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.*

*De acuerdo con el mencionado decreto, ese emolumento se reconoce mensualmente y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, excluyéndosele como factor para liquidar otros efectos legales.*

*[...]*

*Pero bien, adicional al factor de la competencia, lo cierto es que la potestad legislativa radica en el Congreso de la República y, mediante la Ley marco lo que hace el legislador es fijar los objetivos y criterios que deben guiar al Gobierno Nacional para expedir un determinado régimen. Para el caso de la Ley 4ª de 1992, se trataba de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos los de la Rama Judicial, para lo cual el legislador fijó el marco o reglas a las cual debía sujetarse el Gobierno Nacional para expedir el régimen salarial de dicho empleados, pautas y marco consagrados en los artículos 14 y 15 de la referida Ley, la que señaló expresamente en el parágrafo de su artículo 14 que la autoridad administrativa revisaría con sentido de equidad el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación. Luego, al señalar el legislador que esa revisión se realizaría a través de la nivelación o reclasificación de los empleos de la Rama, debió el Gobierno Nacional sujetarse a ese cuadro fijado por el legislador: nivelación o reclasificación, lo que conlleva a incremento salarial y no sólo crear una Bonificación ajena, según el Decreto que la creó, al salario, por cuanto el mismo indica que dicha Bonificación “sólo constituye factor salarial para efectos de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud”.*

<sup>53</sup> Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, con juez ponente: Carmen Anaya de Castellanos, Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022), referencia: nulidad y restablecimiento del derecho, radicación: 76001233300020180041401 (0470-2020), demandante: María Elide Acosta Henao, demandado: la Nación – Fiscalía General de la Nación. Tema: Bonificación Judicial (Decreto 382 de 2013) – Reconocimiento mensual y carácter salarial de la bonificación judicial prevista para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación no acogidos al régimen salarial del Decreto 53 de 1993.



**Así las cosas, al apartarse el Decreto 382 de 2013 al marco fijado por el legislador, al cual debió sujetarse, resulta violario de la misma, por lo que procede la inaplicación deprecada por el demandante: i) porque no ha debido hacer distinción en la forma de pago de dicha bonificación entre acogidos y no acogidos y, ii) porque al ser ésta continua, permanente y en retribución al trabajo, no ha debido sustraerse como factores salariales para liquidar las prestaciones sociales de los empleados.**

Además de las anteriores consideraciones, la Sala no deja pasar por alto que existe una sólida línea jurisprudencial creada por los Jueces y Magistrados de nuestra jurisdicción, la cual desarrolla el carácter salarial de dicha Bonificación al analizar el concepto de salario, la noción de factor salarial y los criterios que permiten su identificación, tomando como referencia lo que al respecto consagran la ley laboral colombiana y la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, indicando que **según la ley laboral colombiana el salario lo constituye todo aquello que el trabajador recibe en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio prestado, siempre que sea reconocido de forma habitual y no por mera liberalidad del empleador. Así tenemos, que la susodicha Bonificación Judicial reúne todos los requisitos del salario ya que sin perjuicio de la denominación que se le atribuya, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, incluidas las bonificaciones habituales**<sup>54</sup>.

En este orden de ideas, **para la Sala es claro que la bonificación judicial creada mediante Decreto No. 0382 de 2013, al ser un pago que reciben los empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de forma habitual y periódica en contraprestación a sus servicios, no habría motivo alguno para desconocer su carácter salarial, máxime si se tiene en cuenta que fue creada precisamente para materializar una nivelación salarial dispuesta en una Ley marco, Aceptar lo contrario, implicaría desconocer abiertamente los límites a la facultad otorgada por el Congreso al Gobierno Nacional y desatentar principios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política**". (Subrayas y negrilla fuera de texto original)

## 10. Medios de prueba

### Documentales que se aportan:

**Prueba 1.** Reclamación administrativa presentada el 15 de marzo de 2024 ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, con su correspondiente constancia de radicación.

**Prueba 2.** Documentos soporte de los valores cancelados por la Rama Judicial a la poderdante desde la expedición de los Decretos 383 y 384 de 2013, y certificación de tiempos de servicio.

<sup>54</sup> Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Sub –Sección B – Sentencia de 22 de marzo de 2018. M. P. Luis Gilberto Ortégón Ortégón - Expediente 110013335025201400345-01 Dte. Pedro Fernando Gómez Núñez, entre muchas otras.



**Prueba 3.** Respuesta a la reclamación administrativa - Resolución No. DESAJCLR24-1387 del 18 de marzo de 2024, con la constancia de notificación.

**Prueba 4.** Acta de acuerdo suscrita entre el Gobierno Nacional y los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y fiscalía general de la Nación.

**Prueba 5.** Oficio PCSJ21-851 del 29 de noviembre de 2021.

## 11. Caducidad del medio de control

Conforme al artículo 164 del CPACA, el término para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.

En el presente asunto se deprecia la nulidad de la Resolución No. DESAJCLR24-1387 del 18 de marzo de 2024, notificada vía correo electrónico el 18 de marzo de 2024; lo que significa que en principio el término de caducidad del medio de control de la referencia, fenecería el próximo 19 de julio de 2024.

No obstante, teniendo en cuenta lo regulado en el ordinal 1 ° literal c) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que señala claramente que la demanda puede presentarse en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan o niegue total o parcialmente prestaciones periódicas. Igualmente, el Consejo de Estado<sup>55</sup> frente a este artículo ha considerado que el concepto general de prestaciones abarca toda obligación de naturaleza laboral; por lo tanto, los actos administrativos que resuelvan reclamaciones de naturaleza salarial o prestacional no son cobijados por la caducidad de la acción, siempre y cuando el vínculo laboral de quién reclama el pago de la acreencia laboral no haya terminado con la entidad demandada.

Así las cosas, teniendo en cuenta que en el presente asunto se pretende el reconocimiento y pago prestaciones periódicas de carácter laboral y la demandante se encuentra vinculada actualmente a la Rama Judicial y presta sus servicios en el departamento del Valle del Cauca, se concluye que el asunto bajo estudio se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, por lo que **no opera el fenómeno de caducidad del medio de control**.

## 12. Estimación razonada de la cuantía

De conformidad con el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, se estima razonadamente la cuantía según las pretensiones de la demanda:

***“ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Para efectos de la competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha***

<sup>55</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, providencia del 8 de septiembre de 2017, radicado 76001-23-33-000-2016-01293-01(4218-16), actor: Ana Cristina Valderrama Álvarez, demandado: Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E.





por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, causados hasta la presentación de aquella. (...)

En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento. (...). (Subrayas fuera de texto original)

En consecuencia, como la pretensión mayor corresponde a la reliquidación de las prestaciones sociales, con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial percibida por la demandante desde el 1° de enero de 2013 a la fecha de presentación de la demanda, la cuantía se estima en la suma de **treinta y cuatro millones cuatrocientos tres mil doscientos cincuenta y tres pesos mcte (\$34.403.253)**<sup>56</sup>, de conformidad con las siguientes tablas de liquidación:

De enero a abril de 2024				
Año	Concepto	Valor		
2024	Sueldo + auxilios	3.219.530		
	Bonificación Judicial	2.076.537		
Mes	Concepto	Valor	2024 con bonificación judicial	Diferencia
Marzo	Bonificación por servicios prestados	1.126.836	1.853.623	726.788
Junio	Prima de productividad	1.609.765	2.648.034	1.038.269
Junio	Prima de servicios	1.656.716	2.725.268	1.068.551
Noviembre	Prima de navidad	3.874.778	6.373.938	2.499.160
Diciembre	Prima de vacaciones	1.859.893	3.059.490	1.199.597
Diciembre	Prima de productividad	1.609.765	2.648.034	1.038.269
Diciembre	Cesantías	4.197.676	6.905.099	2.707.423
Sub total 2024				3.426.019

De febrero a diciembre de 2023				
Año	Concepto	Valor		
2023	Sueldo + auxilios	3.219.530		
	Bonificación Judicial	2.076.537		
Mes	Concepto	Valor	2023 con bonificación judicial	Diferencia
Marzo	Bonificación por servicios prestados	1.126.835	1.853.623	726.788
Junio	Prima de productividad	1.609.765	2.648.034	1.038.269
Junio	Prima de servicios	1.656.716	2.725.268	1.068.552
Noviembre	Prima de navidad	3.874.777	6.373.938	2.499.161
Diciembre	Prima de vacaciones	1.859.893	3.059.490	1.199.597
Diciembre	Prima de productividad	1.609.765	2.648.034	1.038.269
Diciembre	Cesantías	4.197.676	6.905.099	2.707.423
Sub total 2023				9.050.401

De marzo a mayo de 2017

<sup>56</sup> Este valor es solo a efectos de determinar competencia por cuantía; por lo tanto, no implica la renuncia a la totalidad de las pretensiones de la demanda.



Año	Concepto	Valor		
2017	Sueldo + auxilios	2.482.373		
	Bonificación Judicial	1.687.712		
Mes	Concepto	Valor	2017 con bonificación judicial	Diferencia
Febrero	Bonificación por servicios prestados	868.831	1.459.530	590.699
Junio	Prima de productividad	1.241.187	2.085.043	843.856
Junio	Prima de servicios	1.277.388	2.145.856	868.468
Noviembre	Prima de navidad	2.987.593	5.018.793	2.031.200
Diciembre	Prima de vacaciones	1.434.044	2.409.020	974.976
Diciembre	Prima de productividad	1.241.187	2.085.043	843.856
Diciembre	Cesantías	3.236.559	5.437.025	2.200.467
Sub total 2017				1.369.049

De enero a diciembre de 2016				
Año	Concepto	Valor		
2016	Sueldo + auxilios	3.049.166		
	Bonificación Judicial	1.754.113		
Mes	Concepto	Valor	2016 con bonificación judicial	Diferencia
Febrero	Bonificación por servicios prestados	1.067.208	1.681.148	613.940
Junio	Prima de productividad	1.524.583	2.401.640	877.057
Julio	Prima de servicios	1.569.050	2.471.687	902.637
Noviembre	Prima de navidad	3.669.741	5.780.856	2.111.115
Diciembre	Prima de vacaciones	1.761.476	2.774.811	1.013.335
Diciembre	Prima de productividad	1.524.583	2.401.640	877.057
Diciembre	Cesantías	3.975.553	6.262.594	2.287.041
Sub total 2016				8.368.658

De enero a diciembre de 2015				
Año	Concepto	Valor		
2015	Sueldo + auxilios	2.650.488		
	Bonificación Judicial	1.233.271		
Mes	Concepto	Valor	2015 con bonificación judicial	Diferencia
Enero	Bonificación por servicios prestados	927.670	1.359.316	431.646
Junio	Prima de productividad	1.325.244	1.941.880	616.636
Junio	Prima de servicios	1.363.896	1.998.518	634.622
Diciembre	Prima de navidad	3.189.922	4.674.193	1.484.271
Noviembre	Prima de vacaciones	1.531.162	2.243.613	712.451
Diciembre	Prima de productividad	1.325.244	1.941.880	616.636
Diciembre	Cesantías	3.455.750	5.063.709	1.607.959
Sub total 2015				6.104.219

De enero a diciembre de 2014				
Año	Concepto	Valor		
2014	Sueldo + auxilios	2.532.475		
	Bonificación Judicial	814.297		
Mes	Concepto	Valor	2014 con bonificación judicial	Diferencia
Enero	Bonificación por servicios prestados	886.366	1.171.370	285.004
Junio	Prima de productividad	1.266.237	1.673.386	407.149
Junio	Prima de servicios	1.303.169	1.722.193	419.024
Diciembre	Prima de navidad	3.047.891	4.027.917	980.026
Diciembre	Prima de vacaciones	1.462.987	1.933.400	470.413
Diciembre	Prima de productividad	1.266.237	1.673.386	407.149



Diciembre	Cesantías	3.301.882	4.363.576	1.061.694
Sub total 2014				4.030.459
De enero a diciembre de 2013				
2013	Sueldo + auxilios	2.460.146		
	Bonificación Judicial	415.072		
Mes	Concepto	Valor	2013 con bonificación judicial	Diferencia
Enero	Bonificación por servicios prestados	861.051	1.006.326	145.275
Junio	Prima de productividad	1.230.073	1.437.609	207.536
Junio	Prima de servicios	1.265.950	1.479.539	213.589
Diciembre	Prima de navidad	2.960.841	3.460.391	499.550
Diciembre	Prima de vacaciones	1.421.204	1.660.987	239.783
Diciembre	Prima de productividad	1.230.073	1.437.609	207.536
Diciembre	Cesantías	3.207.579	3.748.756	541.178
Sub total 2013				2.054.447

Valor total sin indexar \$34.403.253

13. Competencia

Conforme al artículo 155 numeral 2° y 3° del CPACA,<sup>57</sup> el presente asunto es de competencia de los jueces administrativos en primera instancia, por cuanto se trata de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral cuya cuantía no excede de los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por otro lado, el artículo 156, numeral 3.° de la Ley 1437 de 2011, ha precisado que en los temas relativos al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, la competencia por razón del territorio “[...] **se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios** [...]”; para el caso concreto, esta demanda es de competencia de los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali, ya que el lugar de prestación del servicio de mi poderdante es en el departamento de Valle del Cauca y en dicho municipio; aunado a que el acto administrativo demandado fue proferido en la mentada jurisdicción.

14. Del requisito prejudicial de la conciliación extrajudicial

En atención a lo establecido en el numeral 1° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- (modificado por el artículo 34 de la Ley 2080 de 2021), en el presente asunto no es necesario el agotamiento el requisito prejudicial de la conciliación, en tanto se trata de pretensiones relativas al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho **de carácter laboral**, y por lo tanto es facultativo dicho requisito prejudicial:

<sup>57</sup> “[...] **ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** <Artículo modificado por el artículo 30 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los juzgados administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (...) 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, sin atención a su cuantía. 3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de cualquier autoridad, cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. [...]”.





“[...] **ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR.** La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.

<Inciso modificado por el artículo 34 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> **El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales**, pensionales, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, en los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida. [...]”. (Subrayas y negrilla fuera de texto original)

Así entonces, en vista de que es conocida la posición no conciliatoria de la entidad demandada en asuntos como el *sub examine*, este mandatario se abstuvo de presentar solicitud de conciliación y acude de manera directa ante la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que, en el asunto de marras, corresponde a temas laborales.

## 15. Notificaciones

**La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**, representada legalmente por su directora Ejecutiva de Administración Judicial, doctora Naslly Raquel Ramos Camacho o quien haga sus veces, las recibirá en la carrera 10 # 12 - 15, piso 17, Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía de Cali - Valle del Cauca, teléfono: (2) 8986868, correo electrónico: [dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado**, de conformidad con el inciso 6 del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, modificatoria del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, recibirá notificaciones en la carrera 7 # 75-66, piso 2 y 3, Bogotá D.C. y a través de la página web: [www.defensajuridica.gov.co](http://www.defensajuridica.gov.co), correo para notificaciones: [notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co)

Bajo la gravedad de juramento informo al despacho que las direcciones electrónicas aportadas son las designadas por las respectivas entidades para recibir las correspondientes notificaciones judiciales de acuerdo con lo dispuesto en sus páginas web y que se citan a continuación:

- De la Nación Rama Judicial: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/informacion/cuentas-de-correo-para-notificaciones>
- De la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: <https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx>



**La demandante, Sra. Beatriz Andrea Blanco Ospina**, puede ser notificada en la calle 46 No 109-39, Cali - Valle del Cauca, teléfono: 3188474053 o a través del correo electrónico: [bablanca83@hotmail.com](mailto:bablanca83@hotmail.com)

**La sociedad apoderada de la demandante:**

La sociedad Legalgroup Especialistas en Derecho S.A.S, persona jurídica apoderada de la demandante, recibirá notificaciones en la carrera 12B # 8-45 Sector Circunvalar (Pereira - Risaralda), teléfonos: (6) 3211812 - 3174364677-3014549829 y correo electrónico: [notificaciones@legalgroup.com.co](mailto:notificaciones@legalgroup.com.co)

La dirección de correo electrónico señalada, es la registrada por la persona jurídica que represento como dirección para notificaciones judiciales en el certificado de existencia y representación legal,<sup>58</sup> de igual manera esta dirección se encuentra debidamente inscrita en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados -SIRNA- de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura,<sup>59</sup> como correo electrónico del suscrito apoderado.

**16. Anexos**

**Anexo 1.** Poder para actuar debidamente conferido.

**Anexo 2.** Certificado de existencia y representación legal de Legalgroup Especialistas en Derecho SAS.

**Anexo 3.** Acto administrativo objeto de nulidad, contenido en la Resolución No. DESAJCLR24-1387 del 18 de marzo de 2024, con la constancia de notificación.

**Anexo 4.** Certificación SIRNA.

**Anexo 5.** Constanza de notificación de la demanda a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Rama Judicial.

Atentamente,

**JONATHAN VELÁSQUEZ SEPÚLVEDA**

Representante legal de Legalgroup Especialistas en Derecho S.A.S

Cédula de ciudadanía 1.116.238.813

Tarjeta profesional 199.083 del Consejo Superior de la Judicatura

Proyectó: COQ  
Revisó: C.O.P.

<sup>58</sup> Anexo 2. Certf. Existencia - Legalgroup Especialistas en Derecho S.A.S

<sup>59</sup> Anexo 4. Certificación SIRNA.